

Honduras

Reporte No. 164 Comité PPD e Independientes Diciembre 2025
--

La situación actual de Honduras combina la fragilidad democrática estructural con una nueva capa de inestabilidad provocada por el indulto de Donald Trump al ex presidente Juan Orlando Hernández, acto que reabre viejas heridas sobre impunidad, narcotráfico y tutelaje externo de la política hondureña. Este gesto, ligado además al calendario electoral de 2025, altera el equilibrio interno entre partidos, tensiona la relación con actores internacionales y refuerza la percepción de que la justicia depende más de la geopolítica que del Estado de derecho.

Las elecciones generales se celebraron el 30 de noviembre de 2025, incluyendo presidenciales, legislativas y municipales. El escrutinio preliminar avanzó hasta cerca del 99% de las actas, pero se detuvo por inconsistencias técnicas en unas 2.773 actas (14,5% del total), generando denuncias de fraude y tensiones. El Consejo Nacional Electoral (CNE) reanudó el conteo el 8 de diciembre tras fallas en el sistema TREP, con Nasry "Tito" Asfura (Partido Nacional) liderando con el 40,53%, seguido de Salvador Nasralla (Liberal) y Rixi Moncada (Libre). Un escrutinio especial inició alrededor del 10-12 de diciembre para revisar actas irregulares, con presencia de observadores y transmisión en vivo, priorizando la presidencial.

Trump, por su parte, respalda abiertamente a Asfura, pidiendo votos a hondureños y vinculando el indulto a Hernández con apoyo al PN, lo que Libre denuncia como injerencia directa para instalar un gobierno afín en migración y antidrogas. Esto encaja en su "Corolario Trump" (Doctrina Monroe actualizada), priorizando aliados conservadores en Centroamérica para control regional, tensionando la transición y avivando el antiimperialismo.

Contexto

Desde el golpe de 2009 contra Manuel Zelaya, Honduras vive una democracia formal muy erosionada, con instituciones débiles, denuncias de fraude electoral y una ciudadanía crecientemente desconfiada del sistema. La presidencia de Xiomara Castro, marcada por acusaciones cruzadas de intentos de "nuevo golpe" y disputas sobre el tratado de extradición con Estados Unidos, refleja esa tensión entre promesa de transformación y persistencia de viejas lógicas de poder.

En paralelo, el país enfrenta altos niveles de violencia, corrupción y ataques a defensores ambientales, lo que limita la capacidad de cualquier gobierno para gobernar con legitimidad y eficacia.

El indulto

Juan Orlando Hernández, presidente entre 2014 y 2022, fue condenado en Estados Unidos por conspirar para introducir cocaína en el país, tras años de denuncias de vínculos entre su entorno y redes de narcotráfico. Su juicio y condena parecían confirmar, para amplios sectores hondureños, que el verdadero castigo a las élites solo llega desde tribunales extranjeros y no desde la justicia nacional. Sin embargo, así como viene se va, ya que Donald Trump formalizó el indulto a Hernández anulando con ello una condena de décadas de cárcel, y que estuvo precedido por una carta del mismo Hernández, en la que se presenta como víctima de persecución política alineándose políticamente con Trump, lo que subraya la dimensión personalista y transaccional de la decisión.

La lógica de Trump es usar la clemencia presidencial como herramienta política, favoreciendo aliados o figuras que refuercen su narrativa de persecución y su imagen de líder que “corrige” decisiones del establishment judicial. En este caso, la medida también se cruzó con el interés de la Casa Blanca en apoyar a sectores conservadores hondureños, particularmente al Partido Nacional, de cara a las elecciones.

Además, el gesto proyecta un mensaje hacia otros gobernantes aliados o potencialmente aliados en la región: la lealtad política y discursiva puede traducirse en protección incluso frente a graves acusaciones de narcotráfico, señal que evidentemente debilita la coherencia del discurso estadounidense contra la corrupción y el crimen organizado.

Internamente, este indulto alimenta la percepción de impunidad de las élites y refuerza la idea de que la responsabilidad por el colapso institucional durante el periodo de Hernández quedará en la impunidad por efecto de la decisión de un líder extranjero. En términos políticos este perdón reanima al Partido Nacional y a figuras asociadas al antiguo régimen, que pueden presentarse como “rehabilitadas” o “injustamente perseguidas”, al mismo tiempo que ofrece al oficialismo (LIBRE y aliados) un argumento para denunciar la injerencia externa y reafirmar su discurso antioligárquico y antinarcocracia, lo que puede polarizar aún más el debate público.

Dimensión regional

En el ámbito regional, el indulto a un ex mandatario condenado por narcotráfico socava los esfuerzos multilaterales para enfrentar el crimen organizado, pues muestra que incluso los casos emblemáticos pueden revertirse por decisión política, dificultando la cooperación judicial y policial, y alimentando a aquellos actores que sostienen que la “guerra contra las drogas” está subordinada a intereses de poder.

Esta decisión refuerza la interlocución entre Washington y los grupos conservadores tradicionales, mientras otros países y organizaciones observan con preocupación lo que interpretan como una interferencia directa en la política interna hondureña, en plena campaña electoral.

Todas estas acciones reviven explícitamente la Doctrina Monroe como marco para reafirmar la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental, priorizando control migratorio y antidrogas, y contrarrestando la influencia china mediante aliados "dóciles" en América Latina. Analistas de medios como El País y France 24 la llaman "Corolario Trump", una versión agresiva que combina diplomacia coercitiva, presencia militar expandida y presión económica para expulsar competidores externos y asegurar recursos estratégicos.

Venezuela

Reporte No. 165
Comité PPD e Independientes
Diciembre 2025

La situación en Venezuela mantiene una crisis institucional y humanitaria, exacerbada por la represión postelectoral de julio de 2024 y la escalada intervencionista de Donald Trump desde su reelección. Nicolás Maduro se mantiene en el poder controlando totalmente las instituciones, la detención de opositores y la manipulación electoral; mientras 20 millones de venezolanos padecen pobreza multidimensional y 8 millones han emigrado desde 2014. La intervención de Trump, con sanciones asfixiantes y despliegues navales, agrava el aislamiento sin derrocar al régimen, profundizando un impasse geopolítico de nivel hemisférico.

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, donde Edmundo González Urrutia obtuvo mayor apoyo popular según actas independientes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro ganador con 51,2% el 30 de julio, desatando protestas masivas que fueron reprimidas y terminaron con 23 asesinatos por fuerzas de seguridad y colectivos. El Foro Penal reporta 1.900 presos políticos a noviembre de 2025, incluyendo 42 adolescentes, mientras el TSJ valida detenciones arbitrarias y el Parlamento chavista anula la oposición. Esta crisis se agudizó en enero de 2025 con 401 protestas (13 diarias), un 16% menos que en 2024 pero con demandas combinadas por libertades y servicios básicos (38%), reflejando en la práctica un Estado fallido donde el PSUV monopoliza el poder. Maduro rechazó elecciones legislativas de 2025, convocando un "Congreso de la Patria" para perpetuarse, lo que la OEA y EE.UU. han denunciado como un golpe de Estado continuado.

Emergencia humanitaria

Más de 20 millones de venezolanos (70% de 28,8 millones) viven en pobreza multidimensional sin acceso a alimentos, medicinas o servicios, con 14,2 millones en necesidades críticas según HumVenezuela (marzo-abril 2025). El hambre afecta a 5,1 millones; Convite reporta 28,4% de escasez de medicamentos esenciales en dispensarios, mientras que el Plan Humanitario ONU está desfinanciado al 28%. La 5ta Encuesta de Hogares (2025) evidencia desnutrición, fallos en agua/electricidad y 86,9% de pobreza, proyectando 1 millón más de emigrantes para fin de año.

Intervención de Trump: estrategia y problemas derivados

La intervención de Estados Unidos bajo el segundo mandato de Donald Trump ha intensificado la crisis venezolana sin lograr el derrocamiento de Nicolás Maduro quien ha reforzado su narrativa antiimperialista mientras se agrava el colapso humanitario y se generan tensiones regionales que pueden escalar. Desde enero de 2025, Washington ha combinado sanciones económicas totales, designaciones

terroristas y despliegues militares en el Caribe, presentando a Venezuela como un "narco-estado" de China, Rusia e Irán que amenaza la seguridad hemisférica.

Esta intervención combina sanciones extremas, despliegue naval y una recompensa sin precedentes por Nicolás Maduro, configurando un caso emblemático de "máxima presión" y de reactivación práctica de la Doctrina Monroe en clave siglo XXI. La estrategia busca derribar el gobierno de Maduro, disciplinar a otros gobiernos de la región y enviar una señal a China y Rusia sobre los límites de su influencia en el Caribe.

Despliegue

Desde finales de agosto de 2025, Estados Unidos ordenó un despliegue naval masivo en el Caribe, incluyendo el grupo anfibio del USS Iwo Jima y después el grupo de portaaviones USS Gerald R. Ford, oficialmente bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Este dispositivo se acompaña de submarinos, aviones espía y capacidad de ataques limitados contra embarcaciones y posibles objetivos en territorio venezolano en un esquema que muchos analistas describen como la "diplomacia de cañoneras" moderna. Sin embargo, la operación pasó de una narrativa antidrogas a un objetivo más abiertamente político que busca "sacudir" a la cúpula militar y promover fracturas internas en el régimen, sin llegar –al menos por ahora– a una invasión terrestre clásica. Paralelamente, se amplió el mandato de la CIA para operaciones letales y encubiertas en territorio venezolano y en rutas marítimas, combinando fuerza militar visible con acciones clandestinas contra lo que Washington etiqueta como "narco-terrorismo".

La recompensa por Maduro y el uso del derecho penal

En 2020, durante el primer mandato de Trump, fiscales estadounidenses acusaron a Maduro de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, fijando inicialmente una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a su captura. Esta cifra se elevó posteriormente a 25 millones bajo la administración Biden y, ya en el segundo mandato de Trump, fue duplicada de nuevo hasta llegar a 50 millones de dólares en agosto de 2025, equiparando de facto a Maduro con figuras como Osama bin Laden en la escala simbólica de "enemigos" de Washington.

La recompensa se acompaña de la designación del llamado "Cartel de los Soles" como organización terrorista, lo que amplía las facultades del Ejecutivo para congelar activos, perseguir aliados y justificar acciones militares selectivas sin aprobación legislativa plena bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo. Este uso del derecho penal internacionalizado funciona como herramienta de presión política: "juridiza" el conflicto con Caracas al mismo tiempo que dificulta salidas negociadas, porque cualquier transición que mantenga garantías mínimas para la élite chavista choca con las causas abiertas en tribunales estadounidenses.

Nueva Doctrina Monroe: para muestra otro botón.

Varios análisis académicos y de think tanks describen la política de Trump hacia Venezuela como la expresión extrema de una "Nueva Doctrina Monroe" o

“Corolario Trump”, que plantea el derecho de Estados Unidos a reordenar militar y políticamente su “patio trasero” frente a potencias extrahemisféricas. En este esquema, Venezuela no es solo un problema de drogas y migración, sino un nodo donde convergen intereses de China (créditos y petróleo), Rusia (cooperación militar) e Irán (alianzas estratégicas), por lo que el despliegue naval también actúa como mensaje disuasivo hacia estos actores.

La presión busca además disciplinar al conjunto de América Latina premiando a aquellos gobiernos alineados y castigando a los percibidos como hostiles, en el refuerzo de una arquitectura de seguridad hemisférica centrada en Washington. Al incautar buques petroleros y escalar sanciones, la Casa Blanca intenta controlar flujos de energía, reducir el margen económico del chavismo y advertir a otros gobiernos que la vinculación con rivales estratégicos de Estados Unidos puede tener costos militares, financieros y personales (sanciones, órdenes de arresto, recompensas).

Efectos en Venezuela y en el orden regional

Dentro de Venezuela, el gobierno ha respondido proclamando una “república en armas”, movilizando a millones de integrantes de la milicia bolivariana y desplegando su propia marina alrededor de instalaciones petroleras, lo que eleva el riesgo de incidentes y errores de cálculo. A corto plazo, la ofensiva externa refuerza el discurso antiimperialista de Maduro y le permite cerrar filas internas, mientras profundiza la crisis económica y humanitaria al dificultar exportaciones y acceso a divisas.

En el plano regional, la intervención naval y la recompensa reavivan memorias de intervenciones estadounidenses del siglo XX y polarizan a los gobiernos: aliados de Washington la presentan como defensa contra el narcotráfico, mientras otros la ven como un ensayo general de cambio de régimen y un precedente peligroso para la soberanía latinoamericana. La “crisis venezolana bajo Trump” se convierte así en laboratorio de una estrategia más amplia de control militar del Caribe y de uso instrumental del derecho penal y las sanciones para redibujar el equilibrio de poder en América Latina

Apoyo económico: petróleo y préstamos

China, principal acreedor con 60.000 millones de dólares en préstamos desde 2007, recibe petróleo a precios preferenciales (20% de sus importaciones venezolanas en 2025), permitiendo a PDVSA esquivar sanciones vía swaps y refinerías en Anzoátegui. Rusia, vía Rosneft, comercializa hasta 30% del crudo venezolano y firmó un acuerdo OPEP+ en mayo de 2025 para estabilizar precios, inyectando liquidez crítica al régimen pese a aranceles secundarios de Trump (febrero 2025).

Rusia suministra armamento (Sukhoi Su-30, S-400 entregados en junio 2025), entrenamiento en bases venezolanas y radares, fortaleciendo defensas ante despliegues navales de EE.UU. en el Caribe (mayo 2025). China provee drones y sistemas de vigilancia para represión interna (usados en protestas postelectorales de julio 2024), mientras ambos vetaron resoluciones ONU contra Maduro en 2019 y 2024.

Por su parte, la intervención de Irán en Venezuela forma parte de un eje antioccidental que sustenta al régimen mediante asistencia técnica, militar y económica estratégica, permitiendo sortear sanciones de EE.UU. y proyectar influencia en América Latina. Desde la era Chávez, Teherán ha priorizado cooperación en petróleo y represión interna, fortaleciendo la supervivencia chavista ante la "presión máxima" de Trump en 2025.

La intervención en Venezuela y la injerencia en Honduras (reporte 164) forman parte de una misma lógica estratégica que busca reordenar el hemisferio asegurando gobiernos disciplinados frente a Washington, conteniendo la migración y expulsando a China y otros rivales de espacios clave. Venezuela aporta el laboratorio militar-penal de esa estrategia; Honduras, el laboratorio electoral y de control político en Centroamérica.

“Estados Unidos vuelve a ser fuerte y respetado, y gracias a ello estamos instaurando la paz en todo el mundo.”

Donald Trump

Reporte No. 166 Comité PPD e Independientes Diciembre 2025
--

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos representa un giro pragmático y unilateral bajo el segundo mandato de Donald Trump, priorizando la soberanía hemisférica, el control de fronteras y la reindustrialización sobre el intervencionismo global previo. Este documento de 33 páginas, publicado en diciembre de 2025, critica las políticas post-Guerra Fría como "listas de deseos" fallidas y redefine la seguridad como la protección contra migración masiva, narcotráfico, espionaje chino y subversión cultural, con el hemisferio occidental como máxima prioridad.

En él se enumeran amenazas igualmente una serie de amenazas existenciales para Europa debido a políticas migratorias que crean conflictos y podrían llevar a mayorías "no europeas" en la OTAN, la caída en la natalidad, censura de expresión y pérdida de confianza civilizatoria que eclipsan los problemas económicos. Trump propone "ayudar a Europa a corregir su trayectoria" fomentando partidos "patrióticos" como AfD o Vox, que representan "optimismo" para restaurar el "espíritu occidental" contra regulaciones asfixiantes y transnacionalismo.

Incorporo aquí el artículo de Rick Landgraf publicado en <https://warontherocks.com/2025/12/ten-jolting-takeaways-from-trumps-new-national-security-strategy/> y traducido por Miguel Ruiz, que da cuenta de los principales aspectos de esta estrategia y sobre los que se basa cualquier comprensión global del sustrato ideológico que sustenta las ambiciones de Donald Trump. Es un artículo imperdible.

Diez conclusiones impactantes de la nueva estrategia de seguridad nacional de Trump

La nueva [Estrategia de Seguridad Nacional](#) ya está disponible, y supone un shock para el sistema. No se trata solo de la última articulación pública de los principios, ambiciones y prioridades en torno a los cuales Estados Unidos organiza su política exterior. Más bien, se lee como un manifiesto de un proyecto estadounidense radicalmente diferente. Es más limitada, más partidista, más centrada en sí misma y más personalizada que cualquiera de sus predecesoras. A continuación se presentan diez conclusiones importantes sobre cómo Estados Unidos ve su papel y su lugar en el mundo.

En primer lugar, la estrategia se centra abiertamente en este presidente y no en los Estados Unidos como tal. La mayoría de las estrategias de seguridad nacional al menos intentan presentar a los Estados Unidos como un todo cohesionado y dejan

fuera la política interna. Esta, en cambio, pone en primer plano la división partidista y al propio presidente. Presenta la «segunda administración del presidente Trump» como una ampliación de su primer mandato —una «corrección necesaria y bienvenida»— que comenzó «marcando el inicio de una nueva edad de oro». Califica a Trump como «el presidente de la paz», que «aprovecha su capacidad para negociar» para garantizar personalmente «una paz sin precedentes» en ocho conflictos en todo el mundo, incluido el fin de la guerra en Gaza con el regreso de todos los rehenes vivos a sus familias. Al hacerlo, el documento fusiona la estrategia nacional y la campaña política.

Esto es importante porque cuando una estrategia de seguridad nacional eleva al presidente como protagonista en lugar del país, se difumina la línea entre la estrategia institucional y el mensaje político. Eso altera la forma en que los aliados evalúan la fiabilidad, cómo interpretan las agencias las directrices y cómo evalúan los adversarios la continuidad más allá de una sola persona.

En segundo lugar, reduce el propósito estadounidense a los «intereses nacionales fundamentales» y rechaza explícitamente el orden liberal posterior a la Guerra Fría que Estados Unidos ha construido y liderado. La estrategia define la política exterior como «la protección de los intereses nacionales fundamentales» y afirma que ese es el «único objetivo» del documento. Critica a las «élites de la política exterior estadounidense» por perseguir «el dominio permanente de Estados Unidos sobre el mundo entero» y por vincular a Estados Unidos al «llamado «libre comercio»», al globalismo y al «transnacionalismo», que supuestamente han vaciado a la clase media estadounidense y erosionado la soberanía. Mientras que las estrategias anteriores envolvían el poder de Estados Unidos en el lenguaje de la promoción de la democracia y el orden basado en normas, esta es notablemente diferente. Redefine el liderazgo y el poder a través de la influencia coercitiva, el bilateralismo y la alineación transaccional. Se trata de un Estados Unidos que no necesariamente se retira de la escena mundial, sino que consolida su poder mediante la intimidación y la negociación.

En tercer lugar, la inmigración se eleva a la categoría de problema central de seguridad nacional. El texto declara, sin rodeos, que «la era de la migración masiva debe terminar» y que «la seguridad fronteriza es el elemento principal de la seguridad nacional». Enmarca la migración masiva como un factor que impulsa la delincuencia, la desintegración social y la distorsión económica, y aboga por un mundo en el que los Estados soberanos cooperen para «detener, en lugar de facilitar, los flujos de población desestabilizadores» y controlen estrictamente a quienes admiten. En efecto, esto convierte el control fronterizo y la aplicación de las leyes de inmigración en el eje organizativo de la política de seguridad nacional, y no solo en una preocupación entre muchas otras. Esto tiene graves consecuencias para la postura de las fuerzas militares, la diplomacia y la asignación de recursos. Si la seguridad fronteriza es la máxima prioridad, las misiones en el Indo-Pacífico, Europa y Oriente Medio pasan a estar subordinadas a la aplicación de la ley en el hemisferio. Más que un simple cambio retórico, esta estrategia reordena la jerarquía de amenazas y peligros.

En cuarto lugar, un «corolario de Trump» a la Doctrina Monroe da prioridad al hemisferio occidental e implica la reorganización de la postura de las fuerzas

globales. La estrategia establece que Estados Unidos «afirmará y aplicará un «Corolario Trump» a la Doctrina Monroe» para mantener el hemisferio occidental libre de «incursiones extranjeras hostiles o la propiedad de activos clave», al tiempo que garantiza la estabilidad suficiente para evitar la migración masiva y proteger las cadenas de suministro críticas. No está claro cómo encaja América Latina en el plan, si como región asociada externa o dentro de un perímetro de seguridad ampliado de Estados Unidos. El texto presagia un «reajuste de nuestra presencia militar global», alejándola de los teatros considerados menos centrales y orientándola hacia las contingencias hemisféricas. Existe una marcada jerarquía de regiones: América en primer lugar, con Asia, Europa y Oriente Medio como regiones explícitamente importantes, pero que ahora compiten con una prioridad hemisférica oficial. Se trata de la lógica de la Doctrina Monroe reutilizada para el control demográfico y el nacionalismo económico.

En quinto lugar, la protección de la cultura estadounidense, la «salud espiritual» y las «familias tradicionales» se plantean como requisitos fundamentales para la seguridad nacional. Es aquí donde las influencias del nacionalismo cristiano y del vicepresidente son más evidentes. El documento insiste en que «la restauración y revitalización de la salud espiritual y cultural estadounidense» son requisitos previos para la seguridad a largo plazo y vincula esto con una América que «aprecia sus glorias pasadas y sus héroes» y se sustenta en «un número cada vez mayor de familias tradicionales y fuertes» que crían «niños sanos». Así, Estados Unidos se presenta como defensor de los llamados valores tradicionales, mientras que Europa carece de «confianza en sí misma como civilización y de identidad occidental».

El lenguaje del documento no es el típico guiño a los valores y la cohesión social de las estrategias de seguridad nacional anteriores. Redefine la cultura y la familia como cuestiones explícitas de seguridad nacional, lo que lleva la política cultural interna al ámbito de la toma de decisiones en materia de seguridad nacional.

En sexto lugar, la estrategia eleva las guerras culturales a una lógica de gobierno para la seguridad nacional, y lo hace mediante una retórica que trata las disputas ideológicas y culturales como cuestiones de importancia estratégica. El documento denuncia la diversidad, la equidad y la inclusión como fuente de decadencia institucional y lo presenta como un problema de seguridad nacional. Sin embargo, el argumento no se centra únicamente en la política de personal. Se amplía a un esfuerzo más amplio por definir la cohesión cultural, la identidad política e incluso el cambio social como indicadores de fiabilidad estratégica. Esto queda más claro en la sección dedicada a Europa, donde la estrategia sugiere que algunos aliados se están alejando debido a lo que describe como un liderazgo político fallido, el descontento público con la política hacia la guerra en Ucrania y las supuestas debilidades estructurales de la democracia europea. El texto también especula sobre los cambios demográficos y culturales en Europa como una forma de cuestionar si los futuros gobiernos compartirán la visión estadounidense de sus alianzas. La estrategia no fundamenta estas afirmaciones. En cambio, las utiliza para dar a entender que la alineación cultural es esencial para la asociación estratégica.

Lo que surge no es una evaluación tradicional de la capacidad o la voluntad política de los aliados, sino una prueba cultural de la fiabilidad geopolítica. Los gobiernos europeos que se consideran insuficientemente receptivos a la opinión pública son descritos como supresores de impulsos democráticos legítimos. Sus desacuerdos políticos con Washington se presentan como prueba de una deriva cultural o ideológica más profunda. Por lo tanto, la estrategia trata los debates políticos internos de las democracias aliadas como asuntos que deben ser objeto de escrutinio por parte de Estados Unidos, al tiempo que insiste en el estricto aislamiento de la política interna estadounidense de la influencia extranjera. Esta asimetría revela una visión del mundo en la que la política cultural se convierte en un instrumento de gobierno. Sitúa a Estados Unidos en posición de juzgar el orden interno de sus socios a través del prisma de la compatibilidad ideológica, en lugar de la capacidad institucional o los intereses comunes. Al hacerlo, la estrategia integra la guerra cultural en la gestión de las alianzas y trata las narrativas culturales internas como herramientas estratégicas, en lugar de puramente políticas.

En séptimo lugar, el escudo antimisiles «Golden Dome» se identifica como un objetivo estratégico. La estrategia exige «defensas antimisiles de última generación, incluido un Golden Dome para el territorio estadounidense», con el fin de proteger a Estados Unidos, sus activos en el extranjero y sus aliados. Se trata de una ambiciosa visión de defensa antimisiles por capas del territorio nacional que va mucho más allá del enfoque tradicional centrado en la protección limitada contra los Estados rebeldes. De hecho, se trata de un giro doctrinal. Si se toma al pie de la letra, implica un compromiso industrial y una inversión inmensa. ¿Y cuál es la contrapartida? ¿Una reducción de la proyección de poder? ¿Un ejército más pequeño? Cualquier intento de defensa antimisiles integral desestabiliza la lógica establecida de la disuasión nuclear. Llevarlo a cabo provocaría la preocupación de Moscú y Pekín de que Washington busque la ventaja del primer golpe.

En octavo lugar, el proyecto de larga duración de aumentar el reparto de la carga con los aliados evoluciona hacia un traspaso de la carga, basado en el compromiso adquirido por los países de la OTAN en la cumbre de La Haya de junio de 2025 de destinar el 5% del PIB a la defensa. Si bien las estrategias anteriores pedían a los aliados de Estados Unidos que hicieran más, esta lleva el compromiso a otro nivel. «Los días en que Estados Unidos sostenía todo el orden mundial como Atlas han terminado», y se promociona un «Compromiso de La Haya» en virtud del cual los países de la OTAN «se comprometen... a destinar el 5% del PIB a la defensa», una norma que, según se afirma, los aliados han respaldado y ahora «deben» cumplir. Esto es más que una simple presión y tiene implicaciones para la cohesión de la alianza. Trata el cumplimiento como una condición para obtener favores políticos. Si se aplicara, provocaría graves perturbaciones presupuestarias y políticas en toda Europa y más allá.

En noveno lugar, existe una doctrina más dura de afirmación de la soberanía, acompañada de desconfianza hacia las instituciones internacionales. Los principios de la estrategia hacen hincapié en la «primacía de las naciones» y prometen resistir «las incursiones de las organizaciones transnacionales más intrusivas que socavan la soberanía», con la promesa de «reformular» esas instituciones para que

«ayuden, en lugar de obstaculizar, la soberanía individual y promuevan los intereses estadounidenses». También advierte contra los intentos extranjeros de «manipular nuestro sistema de inmigración para crear bloques de votantes leales a intereses extranjeros dentro de nuestro país». Al enmarcar la política de la diáspora como una amenaza para la seguridad nacional, la estrategia difumina la frontera entre la contrainteligencia y la competencia política interna, una medida sin precedentes en las estrategias de seguridad nacional anteriores. Las afirmaciones sobre la soberanía en el texto ponen de manifiesto un doble rasero: no se debe meter con Estados Unidos y, sin embargo, la Administración Trump no ve ningún problema en intervenir en los debates políticos internos de sus aliados, concretamente Alemania.

Por último, el nacionalismo económico y la reindustrialización ocupan un lugar central en la estrategia de seguridad, y no uno periférico. El documento califica el fomento de la fortaleza industrial estadounidense como «la máxima prioridad de la política económica nacional», y describe una base manufacturera sólida como esencial para el poder tanto en tiempos de paz como de guerra. Promete reequilibrar el comercio, asegurar las cadenas de suministro críticas con un espíritu hamiltoniano para que Estados Unidos «nunca dependa de ninguna potencia extranjera» en lo que respecta a los insumos clave para la defensa o la economía, y posicionar al sector energético como un motor exportador líder. Por lo tanto, la política industrial, los aranceles y los controles de la cadena de suministro no son independientes de la estrategia. Más bien, son instrumentos centrales de la política estatal, a la par con las herramientas militares tradicionales. Aquí radican las contradicciones. La reindustrialización impulsada por los aranceles requiere un gasto federal masivo, mientras que la estrategia también exige un aumento del presupuesto de defensa. Y «no depender nunca de ninguna potencia extranjera» es materialmente imposible en algunos sectores, como los precursores farmacéuticos, el cobalto y las tierras raras, sin remodelar los mercados mundiales.

En conjunto, estas conclusiones apuntan a una estrategia de seguridad nacional que fusiona la política económica y migratoria «America First», una doctrina hemisférica asertiva y los objetivos políticos internos en un único marco organizativo. Dicho esto, no está claro hasta qué punto esto importa en la práctica. Todos los principios expuestos en la estrategia ya han sido mencionados anteriormente por el presidente y su círculo más cercano. Tanto para los aliados como para los adversarios, la sorpresa no radica solo en las políticas específicas, sino en el mensaje de que Estados Unidos ahora ve su seguridad de una manera más personalizada, centrada en el interior y más limitada que antes.

Links sugeridos

<https://agendapublica.es/noticia/20447/estrategia-deshacer-occidente-respuesta-europea>

<https://legrandcontinent.eu/es/2025/12/07/estrategia-de-seguridad-nacional-estadounidense-el-plan-de-la-casa-blanca-contra-europa-texto-integro/>

<https://coyunturaueiie.com/2025/12/09/diez-conclusiones-impactantes-de-la-nueva-estrategia-de-seguridad-nacional-de-trump/>

<https://www.nytimes.com/es/2025/12/12/espanol/opinion/trump-europa-estrategia-seguridad.html>